

**Conflicto y desarrollo regional.
Soluciones de convivencia**

Documento de investigación N° 4

BOTERO OSPINA, María Helena

Conflicto y desarrollo regional: soluciones de convivencia / María Helena Botero Ospina; Grupo de Estudios Regionales Universidad del Rosario. — Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, 2004.

28 p. -- (Documento de Investigación 4).

Incluye bibliografía.

ISSN: 1692-8113

**CONFLICTO ARMADO - COLOMBIA / DESARROLLO REGIONAL
- COLOMBIA / PLANIFICACIÓN REGIONAL – COLOMBIA / CRECIMIENTO
ECONÓMICO – COLOMBIA / VIOLENCIA – COLOMBIA /**
I. Grupo de Estudios Regionales Universidad del Rosario / II. Título.

**Conflicto y desarrollo regional.
Soluciones de convivencia**

María Helena Botero Ospina

**UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
GRUPO DE ESTUDIOS REGIONALES
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
CENTRO EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL ROSARIO**
Bogotá, D.C. 2004

© María Helena Botero Ospina
© Centro Editorial Universidad del Rosario

ISSN: 1692-8113

* Las opiniones de los artículos sólo comprometen a los autores y en ningún caso a la Universidad del Rosario. No se permite la reproducción total ni parcial sin la autorización de los autores. Todos los derechos reservados

Primera edición: julio de 2004
Impresión: Javegraf
Impreso y hecho en Colombia-Printed and made in Colombia

Contenido

1. Conflicto y Confrontación	9
2. Conflicto Armado y Configuración Regional	11
3. Los Costos de la Guerra	14
4. La Presencia Real de los Grupos Armados	18
5. Conflicto y Desarrollo	19
6. Los Esfuerzos de Paz	23



CONFLICTO Y DESARROLLO REGIONAL. SOLUCIONES DE CONVIVENCIA

Julio de 2003

1. Conflicto y confrontación

El conflicto es una expresión de la heterogeneidad de las colectividades humanas. En tanto que manifestación natural de las comunidades, debe ser entendido como una de las formas que asume la diversidad y complejidad de una sociedad con múltiples intereses, expectativas, demandas y problemas de los distintos grupos que la conforman.¹ Siguiendo a Bajoit, podemos afirmar que “el conflicto evidencia la desigualdad de que son víctimas ciertos miembros de la sociedad, y que resultan de sus intercambios con otra categoría social, definida como adversaria. Esta evidencia de la desigualdad no lleva, sin embargo, a excluir al adversario ni a suprimir la relación: ella apunta por el contrario a mejorarla, a hacerla más soportable, a redefinirla sobre nuevas bases. Recíprocamente, la categoría social adversaria, que se beneficia de la desigualdad, no puede o no desea optar por una estrategia de exclusión y se ve obligada a entrar en un intercambio conflictual.”²

A partir de lo anterior podemos destacar dos dimensiones del conflicto social: la dimensión conflicto, que implica una esfera de enfrentamientos sociales, alrededor de demandas y de reivindicaciones de la sociedad, en torno de las cuales es posible llegar a una negociación entre actores incluyentes y aquellos que se sienten excluidos y que por tal razón se conciben como adversarios. La dimensión contradicción, hace referencia al campo de los enfrentamientos sociales donde las demandas y reivindicaciones políticas y sociales, generan prácticas de los antagonistas o imágenes del otro que lo transforman en un enemigo, haciendo casi inaccesibles los espacios de acuerdo, lo que da margen al enfrentamiento y a la violencia como su expresión fundamental.

¹ Vargas Velásquez, Alejo. *Una mirada académica a los conflictos colombianos*, Ministerio de Justicia, PNR, Bogotá, 1994.

² Bajoit, Guy, *Les Paradigmes de la Sociologie*, Louvaine –La Neuve–, 1990.

El conflicto empieza a transformarse en una situación problemática y condenable, cuando se desplaza hacia una dimensión de las relaciones sociales en el que la única solución posible sea la eliminación del otro, concibiéndolo como enemigo. De esta manera, la violencia como parte de la acción política esta asociada a la convicción real o supuesta, de que el conflicto entre actores sociales y/o políticos solo se desarrolla en la dimensión contradicción. Esto implica que en el escenario socio – político no existen oponentes con proyectos comunes, sino antagonistas irreconciliables, con proyectos excluyentes y pretensiones de dominación total.³

Los diversos conflictos que atraviesa la sociedad colombiana, que se han desplazado hacia comportamientos violentos tienen un telón de fondo que los origina, los reproduce y los agudiza, entre ellos podemos destacar:

A. La Sociedad Autoritaria. Nuestro país es proclive al dogma, la intransigencia y la intolerancia, que ha permitido que ciertos actores políticos sintiéndose “dueños de la verdad” orienten las conductas de los miembros de la sociedad colombiana hacia soluciones violentas de las diferencias políticas y los conflictos sociales. Una sociedad con una cultura autoritaria, que produce comportamientos autoritarios. La violencia bipartidista y la poca tolerancia frente a los actores políticos diferentes a las opciones tradicionales liberal – conservadora, son una buena expresión del fenómeno que se pretende caracterizar; la tendencia histórica es a resolver por medios violentos las insatisfacciones sociales y políticas.

B. Los Modelos de Desarrollo. Los modelos de desarrollo implementados en el país, aún por fuera de sus intencionalidades, han excluido importantes grupos de colombianos de los beneficios del desarrollo. Las políticas reformistas, no han tenido cobertura real en amplios sectores sociales y antes que mejorar han tendido a empeorar la situación como en el caso de la reforma agraria frente a la concentración de la propiedad de la tierra. Como lo anunciaba ya la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, “la persistencia de múltiples formas de violencia está relacionada en gran parte con la incapacidad exhibida por el sistema económico de irradiar sus beneficios al conjunto de la sociedad aunque también a la reproducción de una cultura de intolerancia que corroe profundamente las bases de la sociedad colombiana”.

En muchas regiones colombianas la mayoría de sus pobladores se han considerado como “extraños en su propia región” y se les ha exclui-

³ Vargas Velásquez, Alejo, *El conflicto armado colombiano hoy*. Instituto Popular de Capacitación, Medellín, 2000.

do de la participación en las esferas económicas, negándoles el acceso a las posibilidades de recursos para su reproducción familiar y social; se les excluye además de la participación política, mediante prácticas clientelistas que los transforman de ciudadanos a usuarios de los caciques políticos, basados en lealtades personalizadas; se les excluye también de la participación social en la toma de decisiones que atañen a su vida, de la participación cultural, al considerar los comportamientos culturales propios como “frenos a la modernidad”. Sin embargo, la dinámica regional de la violencia, no puede desligarse de su articulación con actores políticos armados.

A esto se suma la ausencia relativa del Estado en las regiones como instancia mediadora y garante del interés general y la carencia de verdaderas políticas públicas de carácter reformista que contribuyan a la solución de las necesidades regionales.

Todo lo anterior nos permite entender que, los conflictos sociales como espacio normal de divergencia social, se desvían hacia una dimensión de contradicción en que la única posibilidad de resolverlos pasa por el recurso de la violencia, la eliminación o la imposición sobre el otro. Podemos considerar entonces el conflicto armado en Colombia como de naturaleza política, con una raíces históricas y sociales determinadas. Tal situación, hace que ciertos grupos organizados se constituyan en actores político-militares que confrontan al Estado o al régimen político, tratando de influenciar las políticas públicas y en algunos casos, de reemplazar al Estado mismo.

2. Conflicto armado y configuración regional

“La constitución del Estado y la nación colombiana se realiza históricamente sobre el eje de un conjunto amplio de asincronías y destiempos que condensan la gran diversidad de los fenómenos económicos, políticos y sociales experimentados por el país en la larga duración y, por tanto, la constante superposición de un cúmulo de historias regionales que, en último término, sintetizan lo que ha sido nuestra configuración social, política, económica y espacial”.⁴

Como producto de la debilidad y de la escasa presencia del Estado, de la segmentación de lo social y de las deficiencias ya mencionadas en nuestro modelo de desarrollo, lo regional se constituye en Colombia en un lugar que condensa la situación de crisis social. Esta crisis se expresa

⁴ Alonso, Manuel Alberto, *Conflicto armado y configuración espacial*, Medellín, Universidad de Antioquia, 1998.

en la inexistencia de un proyecto histórico y cultural común que integre a la Nación. La situación se expresa en la anomia generalizada de nuestra formación social, en la fragmentación del poder, en los conflictos regionales y en la desinstitucionalización y deslegitimación del Estado.

La historia colombiana, entendida como el entrecruce de varias historias regionales, es una historia de conflictos superpuestos y de larga duración que han llevado a la crisis social generalizada a la que hoy asistimos. “En Colombia no existe un conflicto central a partir del cual se puedan explicar el conjunto de conflictos de nuestra sociedad, existen muchos conflictos y muchas guerras regionales, dentro de las cuales los escenarios y actores enfrentados son muy diversos coyuntural e históricamente”.⁵

La violencia tiene necesariamente una dimensión regional asociada con la especificidad del entorno territorial y una dimensión temporal cuyos ritmos no se corresponden con las de otras regiones o ciudades.

La construcción de la región en Colombia pasa por el tamiz de los procesos conflictivos de larga duración, dentro de los cuales, a través de los mecanismos de resistencia y cooperación, se producen formas de cohesión social interna y de diferenciación externa frente a los que son percibidos como “los otros”. El proceso de configuración socioespacial en Colombia se ha desarrollado sobre la matriz de unos territorios articulados a la Nación y otros que se han configurado marginalmente, como el espacio de lo que no encaja en el proyecto de orden existente. Estas regiones excluidas son el producto de actores sociales igualmente excluidos, que actúan bajo el espectro de una institucionalidad casi nula; son espacios territoriales en los cuales no se expresan los intereses políticos, económicos, culturales y militares que sirven de soporte a la “comunidad nacional”.

Este modelo de configuración espacial muestra el contraste existente entre territorios integrados, sobre los cuales se ejerce efectivamente la influencia de los poderes del Estado y unos no integrados a la sociedad nacional que forman un enclave territorial desintegrado y anacional; son los espacios de lo marginal. Las regiones integradas son el escenario de la sociedad civil articulada y de la construcción del orden institucional, y las regiones periféricas son el lugar de lo marginal, de lo parainstitucional y lo contraestatal. “El Estado y la Nación colombiana, en su proceso inclusivo de construcción, presenta como rasgo predominante la existencia de una clara diferenciación entre las zonas *integradas* a la lógica del régimen político y aquellas zonas anómicas que se han ido confor-

⁵ *Ibíd.*, p. 18.

mando al margen de toda normatividad y legalidad -Urabá, Magdalena Medio, Sarare, Caquetá y algunos barrios marginales de nuestras ciudades-. El resultado de este proceso es la acumulación de un conjunto de conflictos que no logran ser canalizados ni pensados en el proyecto político y sociocultural de las élites y los sectores integrados de nuestra sociedad”.⁶

Las zonas de colonización reciente, como escenarios por excelencia de la violencia, se nutren del desarraigo físico, social, cultural y político al que históricamente los somete el régimen político, reproduciendo y acentuando un espíritu provincial, distinto en sus rasgos y relaciones de los patrones impulsados por el centro. Estas regiones periféricas han servido para canalizar los procesos migratorios conflictivos, generados por un patrón de configuración socioespacial históricamente excluyente y que se constituyen en territorios que desafían la legitimidad del Estado. En este sentido las regiones se constituyen no solo por el territorio que ocupan, los actos realizados o las cosas que usan, sino también, por las ideas que tienen sobre si mismas.

El proceso de configuración regional se ha visto marcado por la existencia de un conflicto permanente que ha dado paso a una situación generalizada de contradicción entre los diferentes actores que se han disputado el territorio. En términos generales, los escenarios de este conflicto han sido:

- a. El escenario del conflicto agrario, donde la confrontación se da en la lucha de los colonos y los campesinos, por el derecho a la tierra en contra de los terratenientes, los empresarios agrícolas, las empresas petroleras y el Estado.
- b. El escenario del conflicto obrero-patronal, que enfrenta a los obreros y empleados con los patronos y las compañías mineras y agropecuarias, por mejores condiciones de vida y mejores salarios.
- c. El escenario del conflicto político-institucional, que marca el enfrentamiento entre los sectores excluidos y las terceras fuerzas políticas, contra el Estado y los partidos tradicionales por los derechos de representación y participación política.
- d. El conflicto social y urbano, que enfrenta a la población en general con las administraciones locales, departamentales y nacionales por obras de infraestructura, y con los sectores armados por el derecho a la vida.

⁶ *Ibíd.*, p. 2.

Así, tal como lo afirma José Jairo González: “Regionalización y conflicto surgen como pares dentro de un proceso único de construcción de nación y paradójicamente dentro del propio proyecto de construcción de la democracia en Colombia”⁷.

Los distintos actores sociales que se han confrontado con el Estado y éste mismo, han producido históricamente una tendencia a desplazar los enfrentamientos sociales de la dimensión conflicto a la dimensión contradicción, cuyo producto es un clima apropiado a las respuestas violentas. Para modificarlo, es necesario aceptar los conflictos sociales y culturales como verdaderos conflictos que deben ser reconocidos introduciendo el punto de vista de los ciudadanos en el debate político.

3. Los costos de la guerra

El conflicto interno armado causa profundos estragos en la población colombiana, en su economía y en sus expectativas futuras. “La violencia implica en la perspectiva económica, el surgimiento de expectativas negativas que afectan la marcha normal de las actividades y la pérdida de recursos en el desarrollo”.⁸

La existencia del conflicto armado interno ha incrementado en los últimos años sus ya altos costos sociales. A lo contradictorio que resulta el hecho de que una nación tan rica tenga tan altos niveles de pobreza, se suma el crecimiento del presupuesto para la guerra frente a la capacidad de inversión del Estado en el sector social.

El presupuesto de la cartera de defensa es el más alto del país frente a los otros ministerios y durante los últimos gobiernos ha sido el único en lograr un incremento real. Las fuerzas militares aumentan su presupuesto sobre la base de la necesidad de contar con recursos suficientes y modernos tecnológicamente para enfrentar a los actores armados, teniéndose como base de tal asignación de recursos, la necesidad de “ganar la guerra”. Los rubros dedicados a la educación, la salud, la generación de empleo, el desarrollo y las obras públicas pierden poder adquisitivo (a pesar de los incrementos en términos porcentuales en los ingresos de la nación), y a su vez, medio ambiente, la cultura y la juventud existen de nombre, pues, no han sido financiados en la práctica.

Los últimos análisis hechos sobre los costos de la guerra muestran que los costos brutos estimados del conflicto armado en los últimos 5 años

⁷ González, José Jairo, *Regionalización y conflicto: Guaviare, Vichada y Guainía. De colonos, guerrilleros y chichipatos*, Bogotá, IEPRI-FESCOL, 2000.

⁸ “Observatorio de la Violencia”, No. 4, Bogotá, 1996.

estarían alrededor del 9% del PIB.⁹ A estos tendríamos que adicionarle, el gasto de los colombianos en seguridad privada, que han generado formas de trabajo asociado, ante el sentimiento creciente de vulnerabilidad que se experimenta. Por otra parte, tenemos el mercado de armas con las que comercian la delincuencia común y organizada, que se benefician de la situación de confrontación armada para sacar un mayor provecho.

La guerra se convierte, a su vez, en una fuente de empleo y en una forma de subsistencia que corroe las estructuras sociales. No es extraño encontrar en las zonas de conflicto armado, tanto urbanas como rurales, actores armados individuales, vendidos al mejor postor, motivados por devengar un salario que en muchas ocasiones supera los jornales establecidos para el común de los trabajadores.

Los gastos enunciados no incluyen los deterioros físicos de poblaciones literalmente destruidas por la guerra, de pérdidas ecológicas y ambientales derivadas de la voladura de oleoductos, de cosechas no recogidas, vías destruidas y taponadas, y sobre todo, la pérdida de potencial humano, que dejan grupos familiares desprotegidos y en no pocas ocasiones los empujan a la miseria que se deriva de la condición de desplazamiento forzado.

El desarrollo como fenómeno más de orden cualitativo que cuantitativo debe ser alcanzado a partir del potenciamiento de dimensiones de carácter intangible. Las variables cualitativas que señalamos son de orden simbólico, cultural, social, cívico, etc. Sin embargo, la existencia del conflicto armado interno limita la construcción y desarrollo de todo este tipo de capitales atributos necesarios al desarrollo de nuestras regiones.

Los impactos de la guerra sobre la economía son contundentes pero no los únicos; razón por la cual, es necesario mirar como se afectan los otros tipos de capital necesarios a la construcción del desarrollo regional.

La violencia generalizada en el sector rural ha ocasionado un drástico cambio en la composición de la población y una redefinición de papeles y formas de vida tradicionales, particularmente en lo referente a la migración hacia las grandes ciudades.

No es nada coincidencial que las regiones más convulsionadas sean aquellas que se caracterizan por su riqueza y su biodiversidad. El modo como ha evolucionado la apropiación violenta del territorio en los últimos años se inscribe en espacios de conflicto por el control de recursos naturales o de zonas estratégicas en la proyección del desarrollo regional. La sostenibilidad de los sistemas no se refiere solamente al problema ambiental, ni éste a un asunto ecológico, sino que corresponde también a la esfera de lo político y lo económico.

⁹ Departamento Nacional de Planeación, *La paz el desafío para el desarrollo*, Bogotá, 1998.

Si hablamos de la dimensión cultural del desarrollo es necesario observar cómo se responde a las diversas tradiciones culturales y como se involucran las diferencias sociales en los distintos niveles. No se puede imponer un patrón o modelo de desarrollo aplicable universalmente, se trata de proponer el cambio en la continuidad cultural, evitando imponer modelos exógenos, y al mismo tiempo rechazar el encerrarse en el tradicionalismo inmovilista. La diversidad intercultural e intracultural no se puede ver como limitante, sino manejable de acuerdo con el sentido de respeto a las particularidades dentro de un proyecto común.

La existencia del conflicto interno armado niega las posibilidades de que la riqueza de nuestras tradiciones y diferencias culturales emerjan como un valor agregado, en tanto que los grupos armados imponen una forma única de comportamiento, niegan las formas tradicionales de resolver los conflictos, sobretodo en los pueblos indígenas, rompen con las tradiciones sobre las cuales se basan las relaciones familiares y sociales y con todo ello, menoscaban uno de los principales capitales atributos para el desarrollo regional.

En cuanto al capital social entendido como el acumulado de la riqueza humana, natural, de infraestructura e instituciones que tiene la sociedad, - la cultura, el conocimiento, la educación, los recursos naturales, las vías de comunicación, etc – se constituyen como la base del poder ético y se configura paulatinamente para elevar las potencialidades y la creatividad de todos los seres humanos; es decir, para construir desarrollo endógeno.

El problema reside aquí en que los actores armados restringen la base de poder al apropiarse de las posibilidades de generación de riqueza y al cooptar por la fuerza o la intimidación las instituciones locales colocándolas a su servicio. El establecimiento de relaciones autoritarias desconoce los intereses de la sociedad en su conjunto.

El capital simbólico y el capital institucional consisten en el poder de la palabra para construir la realidad y en la confianza que tienen los ciudadanos frente a sus instituciones. En los últimos años uno de los aspectos más importantes para quienes ejercen la política como oficio, es la imagen ante la opinión pública; esta imagen es usada como mecanismo de conquista del poder político, bajo el supuesto que una vez obtenidas todas las facultades para gobernar, las capacidades y potencialidades se pondrán en función de las mayorías. Pero la realidad es que la acción política en la mayoría de los casos resulta contraria a la imagen que una vez se proyectara. Se presenta incoherencia entre las promesas, los ideales, los propósitos, las políticas y lo que ejecuta, entre el espíritu de trabajo por la sociedad y el beneficio material de unas minorías, entre la riqueza discursiva de unos y la pobreza física de otros.

Uno de los aspectos que tienen mucho que ver con la violencia generalizada es la concepción que se tiene sobre la autoridad y de cuáles son los fundamentos de su legitimidad; de allí se desprenden también las legitimidades que unos y otros esgrimen para el ejercicio de la fuerza. Podría introducirnos en esta reflexión el caso de las campañas de “fortalecimiento de nuestras instituciones” a través de la “buena imagen”, como las que realizan las fuerzas de seguridad del Estado, en lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo y paz: “Mediante la coordinación de unidades militares con la comunidad y organismos gubernamentales, se han realizado 235 jornadas cívico – militares encaminadas a ayudar a la población civil en las necesidades básicas mediante la prestación de servicios médicos, odontológicos, asesorías jurídicas, agropecuarias, veterinarias, etc... Particularmente, se destacan las obras realizadas por los ingenieros, las cuales son para el ejército presencia del gobierno en regiones pobres.”¹⁰

El esfuerzo para que la sociedad “vuelva a creer” en sus instituciones evidencia la debilidad de las relaciones democráticas gobernantes – gobernados, que son en esencia relaciones de poder, y desencadena una crisis de autoridad. Por otra parte, muestra que la “defensa de nuestras instituciones” se reduce al ejercicio del poder coercitivo lo que refleja la forma como se entienden las causas estructurales que dan origen al disenso: “En muchas zonas rurales y urbanas, en las cuales el conflicto armado se arraiga, la presencia del Estado se da a través de una acción punitiva, represiva e impositiva para la comunidad... El Estado solo aparece cuando lo hace la fuerza pública y las administraciones se caracterizan por ser el doble de ineficientes y corruptas que la generalidad del aparato estatal”.¹¹

La debilidad de las instituciones corresponde a la ausencia de autoridades que tengan fundamento en un conocimiento y visión crítica de la realidad social que está en movimiento continuo. La autoridad que sustenta el ejercicio de su poder en el conocimiento de esta, en la incorporación de los elementos de cambio, no niega la oposición sino que la incorpora en procesos democráticos reales.

Podemos entonces observar el atentado económico que constituye la guerra y los profundos efectos que puede tener en cuanto al deterioro de las condiciones de vida de la población; si no es posible pensar en el desarrollo económico, mucho menos en el desarrollo integral.

“Aunque muchos encuentran en la injusticia social la causa de esta guerra y de los enfrentamientos y exigen como prerrequisito para cesar

¹⁰ Declaración del General Ospina, comandante de las Fuerzas Militares, *El Tiempo*, diciembre de 2002.

¹¹ López, Manuel, Conferencia presentada en Seminario Desarrollo y Paz, nov. 5-8, 2000, p. 4, en Herrán, Carlos, *Desarrollo y Paz: Seis Ensayo para abordar la discusión*, Bogotá, CINEP, 1999.

las hostilidades, el establecimiento de ajustes sociales, es menester recordar que casi cincuenta años de destrucción han retardado el progreso económico de nuestra Nación y por tanto, se hace necesario crear un espacio en el cual se intente, aún desde la diferencia, encontrar salidas y puntos de partida para iniciar la búsqueda de equilibrios matizados por la igualdad de oportunidades y las cualidades mínimas de una deseada justicia social”.¹²

El costo de la guerra y de las formas violentas de tratamiento del conflicto con relación al desarrollo es más que el puro costo económico. A nivel social, la disminución de recursos de inversión social para sostener la guerra. A nivel cultural, el uso de la fuerza y la violencia va acentuándose en las relaciones cotidianas y reproduciéndose en los hábitos y comportamientos, con lo cual se pone en duda la estabilidad de las instituciones sociales y su capacidad para regular la convivencia. El impacto psicológico se ve en la “pérdida de la confianza fundamental”, ya que es la fuerza del terror la que define los conflictos. Emerge una ética perversa según la cual es bueno todo lo que daña al adversario y malo todo lo que lo aprovecha. Todo ello, sin contar con el grave daño ecológico que causa la explotación y consumo indiscriminados de recursos para sostener la guerra.

4. La Presencia Real de los Grupos Armados

“Hoy las guerrillas se extienden por mayores regiones que hace 5 años, hasta abarcar un teatro de operaciones de 715 municipios. Los grupos de autodefensas actúan en unos 450 municipios y los narcos defienden sus tierras en 400 municipios del país. A diferencia de la jurisdicción estatal sobre el territorio, que establece fronteras y distancias administrativas, la repartición de zonas de dominio guerrillero y paramilitar somete a la población a regímenes de autoridad cotidianos de un carácter marcadamente totalitario en caminos y viviendas, barrios y aldeas”.¹³

Los grupos armados colocan hoy en día todos sus esfuerzos en controlar e influir sobre los poderes regionales y locales, guardando frente a éstos una ambigua y contradictoria relación: se les señala como espacios de clientelismo y corrupción, pero al mismo tiempo se crean relaciones de convivencia y de adecuación recíprocas. Así, se constituyen unas relaciones de carácter pragmático de mutuo beneficio, que hacen confu-

¹² DNP, *op. cit.*, p. 2.

¹³ Reyes Posada, Alejandro, *Derechos Humanos y Guerra Civil*, IEPRI, 2002.

los objetivos de la guerrilla, sin que esto pueda interpretarse como el abandono de su pretensión de acceder al poder nacional.

En la práctica las organizaciones armadas han sustituido el propósito de lograr influencia política a través de candidatos y electorados propios, por las cada vez más frecuentes prácticas de intimidación que les permiten manejar los gobiernos locales estableciendo con su presencia armada las reglas de juego y los compromisos de los candidatos, impidiendo que escapen a su control, escojan sus colaboradores y propongan alternativas. Esta situación se ha evidenciado últimamente a partir del llamado del Presidente Uribe a los candidatos a las próximas elecciones regionales a no someter la aprobación de sus programas o a llegar a acuerdos electorales con los grupos armados, *so pena* de acciones judiciales en su contra.

Las cúpulas de los grupos armados se caracterizan por su triunfalismo militar acompañado de una cierta arrogancia política. Esto no significa que estemos pasando de la confrontación armada a una guerra de posiciones o a una capacidad real de los grupos armados de defender territorios ni siquiera por un tiempo limitado.

El panorama del conflicto armado ha cambiado. La guerrilla que anteriormente operaba básicamente en espacios rurales, en la actualidad se acerca a los centros urbanos más importantes del país y demuestra presencia muy activa en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, fronterizas y con importante actividad agropecuaria. De esta manera y en palabras de Alfredo Rangel “La guerrilla se extiende de manera cada vez más evidente hacia las zonas que le proporcionan ventajas estratégicas en la confrontación”.

Las autodefensas también experimentan cambios. Cada día buscan construir mayores niveles de legitimación en las regiones donde tienen presencia volviéndose abanderados de causas regionales, siendo más críticos del actuar del Estado y de las Fuerzas Militares. Manifiestan que su existencia tiene como base el abandono del Estado de sus deberes de tutelar la vida, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos, dándole origen político y militar a las autodefensas.

Esto se acompaña con el esfuerzo de los ciertos grupos de autodefensa de constituirse en un proyecto nacional que supere su característica fragmentación y especificidad regional. La iniciativa se ve formalizada en el proceso de diálogos que se adelantan actualmente con el gobierno y que le da reconocimiento político a fuerzas que anteriormente el establecimiento se había negado a reconocer como tales.

5. Conflicto y Desarrollo

La dinámica de la violencia en Colombia, cuya atrocidad desborda toda capacidad humana de asimilación, no puede plantearse como el problema de una sociedad violenta o de una cultura violenta. Este tipo de generalizaciones desvían el análisis sobre las causas objetivas de la violencia, es decir, sobre las dinámicas que provocan esa forma particular de tratar los conflictos.

Debemos hablar más bien de una sociedad fragmentada, con un Estado débil en lo institucional, que no tiene capacidad de respuesta, en la cual las poblaciones, por negligencia, incapacidad o temor, aparecen como inermes, adormecidas e insensibles frente a la realidad.

En este contexto, nos planteamos la comprensión de la naturaleza y tratamiento violento de los conflictos y su relación con el desarrollo de la sociedad. Así, se hace necesario entender qué tienen que ver nuestros conflictos con el desarrollo, para lo cual, es necesario examinar los procesos económicos, políticos, culturales, etc., a la vez que una serie de precisiones en sus interrelaciones, siempre sobre realidades y fenómenos concretos.

Los diagnósticos sobre la violencia denuncian las acciones e inacciones de los diferentes estamentos de la sociedad, evaluando la situación y recomendando cambios y reformas profundas sobre determinados aspectos. En particular, se nota el predominio del nivel nacional, la resolución en grande, las salidas “de una vez por todas”, por encima de las alternativas locales y regionales concretas. Este es el primer problema para abordar el tratamiento de los conflictos de carácter violento; una especie de resolución “virtual”, de explicación abstracta que no permite su desarrollo, mucho menos un cambio en la manera violenta de tratarlos, porque no corresponden a realidades concretas, que tengan correspondencia con los fenómenos que requieren plantear alternativas de solución.

Un elemento relevante para entender algo de la naturaleza de nuestros conflictos y de su relación con el desarrollo, es revisar y hacer los diagnósticos a la luz de problemas concretos, de objetivos planteados, de una especificidad que permita delimitar muy bien el problema con sus actores, espacios y procesos sin arriesgar la integridad de las dimensiones de la sociedad, la interdisciplinariedad o la multiplicidad de interpretaciones.

Continuamente, se afirma que la injusticia estructural y la pobreza están íntimamente relacionadas con los fenómenos de violencia. Cuando hablamos de injusticia estructural la entendemos como una serie de procesos que menoscaban los derechos fundamentales de todas las personas

en los ámbitos que sustentan la vida en sociedad, desde las condiciones mismas de existencia hasta las posibilidades de disfrute y bienestar. De allí que, durante tantos años se haya dado la discusión sobre si la pobreza es la causa, una de las causas, o la más importante causa de violencia.

De otra parte, se ha empezado a señalar que el origen de los problemas de violencia es también la riqueza (banano, petróleo, carbón, esmeraldas, coca, oro), lo cual, es simplemente una forma diferente de abordar el mismo problema.¹⁴ Esta afirmación busca desvirtuar la relación entre violencia y pobreza y señalar que el empobrecimiento de las personas obedece a procesos de enriquecimiento en regiones con gran potencial natural para ser explotado o en zonas propicias para la promoción de economías ilícitas.

Lo cierto es que, no podemos desligar ni lo uno ni lo otro del fenómeno de violencia porque enriquecimiento y empobrecimiento son procesos interdependientes y, de acuerdo con ello, estarían mutuamente relacionados con los fenómenos de violencia. Otra cosa es que los sectores empobrecidos entren en tensión que desborde en comportamientos violentos, por reivindicaciones o para mejorar el nivel de vida, o que los sectores hegemónicos y dueños del capital entren en pugna por el control de mercados, generando procesos de empobrecimiento.

El planteamiento de soporte sobre las causas de la violencia es que ella corresponde a desequilibrios estructurales en diferentes niveles. Un claro ejemplo de ello es la violencia que afecta al campo colombiano. “La abrupta modificación de la población rural con relación a la urbana se ha dado por la ausencia de políticas de desarrollo rural integral por parte del Estado, por la concentración de la tierra en pocas manos, los escasos recursos para la política social, la violencia y la falta de compromiso de la sociedad civil. El abandono institucional, la violencia y la confusión e inestabilidad son la síntesis de la situación campesina. Los actores armados buscan el control territorial y político utilizado como estrategia el involucrar a la población civil, a la dirigencia social y a las autoridades locales. Este panorama impide las actividades en el campo, obligando el desplazamiento a través de la descalificación de cualquier opción discordante, la intimidación y las amenazas.”¹⁵

Paralelamente, se han gestado y fortalecido formas de economía ilícitas, cultivos de rápidos resultados, que aprovechan los altos niveles de desempleo en el campo y son auspiciadas por organizaciones con una sólida

¹⁴ DNP., *op. cit.*, p. 5

¹⁵ Martínez Guchuovo, José. “Desarrollo rural y violencia en Colombia”, Conferencia presentada Seminario Desarrollo y Paz, nov. 5-8, 2000, p. 46, en Herrán, Carlos, *Desarrollo y paz: seis ensayos para abordar la discusión*, Bogotá, CINEP.

base de funcionamiento e intereses claros de acumulación de capitales, con un claro componente económico. “El cultivo de coca ha permitido ingresos permanentes, basados en las características ideales de la tierra y el clima, en la fácil y masiva apropiación de tecnología para su transformación, las posibilidades de empleo de acuerdo con las etapas del proceso; en fin, ha permitido una estabilidad económica regional... Sin embargo, se trata de un desarrollo estrictamente económico, productivo, que satisface necesidades materiales inmediatas y permite la entrada acelerada y devastadora del capitalismo, “desarrollo” basado en el monocultivo y, por tanto, monodependiente, además, con la consiguiente imposición de valores que desarticulan la organización y la participación”.¹⁶

Estas dinámicas de acumulación auspiciadas con grandes flujos de capital sobre una población empobrecida, como actividad ilícita, permite dinámicas sociales de la misma índole. El “desarrollo” basado en economías ilícitas desencadena procesos de violencia organizada, en tanto que se acude a las armas para defenderse del control del Estado y para el logro de sus intereses. Dado que la mayoría de la población satisface sus necesidades básicas, los narcotraficantes estimulan el cultivo para maximizar sus ganancias y la guerrilla y las autodefensas para sus actividades político-militares. Esta actividad se rige entonces por la lógica del capitalismo y de la guerra. La violencia tiene que ver con la manera como se genera y se distribuye la riqueza en un medio donde los intereses particulares priman sobre los colectivos.

Por otra parte, la presencia importante de un número de delitos contra el patrimonio económico podría reflejar los profundos desequilibrios de la estructura socioeconómica provocados por un modelo de desarrollo excluyente para amplios grupos de población; para los cuales, las exigencias de participación y la vigencia de la ciudadanía plena siguen siendo válidas como demandas; pero esto se potencia con la rápida trastocación de valores de la sociedad colombiana en el sentido de privilegiar como factor de éxito y prestigio social, el enriquecimiento a cualquier precio. Todo lo anterior, en el marco de unas instituciones estatales, cuestionadas como reguladoras de las relaciones sociales y con una crisis desbordante de la justicia que tiene como resultado una impunidad rampante. La impunidad es un elemento de causalidad muy grande para retroalimentar la espiral de violencia y una tentación justificadora para acudir a la mal llamada “justicia con mano propia”.

¹⁶ Uribe, Graciela y Ferro, Juan Guillermo. Ponencia presentada en la Conferencia Desarrollo y paz, nov. 5-8, 2000, en Herrán, Carlos, *Desarrollo y paz: seis ensayos para abordar la discusión*, Bogotá, CINEP.

Como si esto fuera poco, los campesinos se ven envueltos en confrontaciones ideológicas que ocultan intereses de control territorial y político de sectores que buscan tener o mantener la hegemonía. El fenómeno del paramilitarismo se acompaña de un desplazamiento sistemático de la población campesina, principalmente a través de la intimidación y el terror, de las masacres selectivas e indiscriminadas. El desplazamiento ha generado múltiples y extremas necesidades así como nuevos conflictos, no solo para quienes son víctimas de él, sino para las poblaciones y zonas donde llegan a refugiarse.

Durante mucho tiempo las guerrillas han legitimado su accionar sobre la base de que el sistema político y económico ha beneficiado a unos sectores de la sociedad en detrimento de otros; por su parte los gobiernos han asumido que las guerrillas son la mayor amenaza para el sistema democrático y legitiman con ello la represión. Hoy, parece haberse perdido el horizonte, pues, la guerra ha tomado el primer plano; se han diversificado los grupos armados al punto de no tener claridad sobre su naturaleza y actividades, y el temor se levanta como muestra de la incapacidad de algunos sectores para asumir los conflictos. No es claro si la confrontación responde a intereses políticos, económicos o ideológicos, o en una extraña mezcla de todos ellos.

En este círculo se reproduce la violencia a la sombra de un Estado que se debilita paulatinamente, incapaz de abordar los problemas de manera estructural. Esta manera un tanto simple de ver el problema, debe confrontarse con la particularidad de las regiones donde está presente, con sus causas, sus dinámicas y efectos, sin desconocer el punto de vista de cada uno de los actores sociales que los viven.

Hablar de desarrollo en este contexto no tendría sentido si no tuviera que ver con la reconstrucción del horizonte que pueda guiar a la sociedad en medio de la incertidumbre, la confusión y la barbarie. El concepto de desarrollo debe recuperar para sí la multiplicidad de aspectos de la vida social, desde la satisfacción de necesidades básicas hasta las garantías a la participación en un orden democrático.

“A pesar de los ya reiterados diagnósticos, cifras e indicadores que reflejan los costos y el impacto nefasto de la guerra para la sociedad y la economía rural, es necesario insistir en la paz; pero para la concreción de ella es importante tener la máxima claridad y entendimiento acerca de la naturaleza del conflicto, las características de las fuerzas enfrentadas, el tipo de intereses en juego y los pasos conducentes a propiciar una salida política a través de la negociación.”¹⁷

¹⁷ Ospina, Juan Manuel, Conferencia dictada en el Seminario Desarrollo y paz, nov. 5-8, 2000, en Herrán, Carlos, *Desarrollo y paz: seis ensayos para abordar la discusión*, Bogotá, CINEP.

6. Los Esfuerzos de Paz

“Los actos masivos y simbólicos a favor de la paz, que buscan esencialmente activar una conciencia de los elementos que ella involucra, se complementan con muy pocos esfuerzos que tienden a impulsar dinámicas concretas en términos de desarrollo humano integral. Sin embargo, aunque las acciones concretas son escasas, empiezan a verse como experiencias fundamentales y punto de partida en la consolidación de una paz integral. Con relación a las demandas por la paz es claro que más allá del rechazo a la violencia, los diversos sectores de la sociedad consideran que la paz no se puede quedar atrapada en un simple proceso de negociación, con el gran riesgo de que sea una negociación de élites.”¹⁸

En este proceso de fortalecimiento de la sociedad civil, el sector empresarial ha manifestado un compromiso con la paz y ha hecho propuestas que asumen una relación directa entre los conflictos sociales y los procesos de desarrollo; se ha propuesto el análisis de los fenómenos de violencia con el fin de recomendar programas de corto, mediano y largo plazo, y de formular programas de desarrollo que contribuyan a los procesos de paz, a partir de la inversión social desde las mismas empresas.

Para el sector empresarial nacional, pensar la paz como un proyecto colectivo, es pensar en la más grande empresa del país y de ahí que sus planteamientos se articulen bajo la propuesta de la gerencia de la paz: “A la empresa de la guerra hay que contraponerle una no menos organizada, eficiente y estructurada empresa que garantice resultados, que movilice a todos los actores del conflicto en torno a cabezas visibles; hacer gerencia con una organización sencilla y efectiva que garantice en la práctica la parte ejecutiva del proceso, que articule esfuerzos dispersos. No se le puede apuntar a todo, es necesario empezar a regionalizar, a incidir en la provincia: La gerencia es un equipo humano con capacidad de gestión administrativa, con capacidad de ejercitar políticas.”¹⁹

Además, debemos considerar como elemento positivo la creación en los últimos tiempos de movimientos que desde la sociedad colombiana buscan estimular las condiciones propicias para el inicio de la solución negociada al conflicto armado. Dentro de ellos hay que señalar a la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, los Grupos de Empresarios por la paz y sobretodo, la creación de varias comisiones independientes de colombianos que buscan cumplir roles de facilitación

¹⁸ Fernández, Carlos Hernán, *Desarrollo y paz: seis ensayos para abordar la discusión*, Bogotá, 2000.

¹⁹ Marulanda, Eugenio. “El sector privado frente al desarrollo y la paz”. Seminario Desarrollo y paz, en Herrán, Carlos, *Desarrollo y Paz: seis ensayos para abordar la discusión*, Bogotá, CINEP, 2000.

y de buenos oficios entre el gobierno colombiano y las organizaciones alzadas en armas.

Existe hoy en día una mayor comprensión de la dinámica del conflicto interno armado y una mayor sensibilización hacia la búsqueda de salidas políticas negociadas al mismo. Este es un elemento positivo, por cuanto refleja que existe una creciente conciencia de los efectos devastadores de la confrontación armada en la sociedad colombiana.

Parte de estas opiniones se deben probablemente a una percepción acerca de los costos de la guerra, aunque no existe todavía una seria reflexión sobre los costos de la negociación política. Los actores económicos deben entender que la guerra favorece el crecimiento de las actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas, y que la resolución del conflicto amplía los márgenes de maniobra del sector privado en el incremento de sus actividades, en la productividad de sus inversiones y en la seguridad del mantenimiento de condiciones favorables a la asociación con capitales extranjeros y el acceso a nuevos mercados.

Sin embargo, persisten sectores que aún creen en una salida militar a la confrontación armada. Debemos anotar en aras del realismo, que algunos sectores dirigentes sobre todo del nivel regional, aunque discursivamente comparten la idea de la solución negociada al conflicto, en privado apoyan salidas de confrontación, expresadas en simpatías y apoyos a los grupos de autodefensa.

Hay que tener en cuenta de forma adicional, las prioridades de la agenda global que abarcan aspectos como la utilización racional del medio ambiente, el problema del tráfico de drogas, la consolidación de la democracia y la vigencia de los derechos humanos. La presencia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, es un reflejo de esa creciente preocupación internacional. La comunidad internacional observa con preocupación las posibles interrelaciones entre organizaciones guerrilleras y de autodefensa con la actividad ilícita del narcotráfico.

El problema del conflicto armado en Colombia es más complicado que un simple problema de voluntarismo. No es tan sencillo como tener más o menos simpatías, más o menos buena voluntad. Aunque como lo anota el proyecto de negociación de Harvard “cuanto mejor sea la relación entre las partes, más fácil será la exploración conjunta de sus intereses y de las posibles opciones creativas para satisfacerlas.”

Por supuesto que una buena capacidad negociadora facilita la superación de obstáculos, pero no se puede perder de vista lo fundamental : se trata de un proceso de negociación política entre actores con poder. No se trata de negociar la desmovilización de un grupo de guerrilleros o parami-

litares virtualmente paralizados o descreídos de sus medios y sus fines, ni se trata de imponer las condiciones de la rendición a un enemigo derrotado. En el trasfondo del conflicto político armado, hay planteado un conflicto de poder entre el Estado y los sectores dirigentes de la sociedad, de una parte y las organizaciones insurgentes que pretenden disputar ese poder.

Como lo señala R. Launay, en un intento por acercar el conflicto y la negociación, ésta es “una dinámica compleja, que combina los procesos conflictivos y cooperativos, dinámica momentánea y frágil con preponderancia cooperativa, escogida o no por los partidarios y adversarios, tendiente a arreglar de manera pacífica un conflicto pasado, actual o potencial, excluyendo, provisionalmente al menos, la fuerza, la violencia, el recurso a la autoridad, e implicando el reconocimiento de los partidarios/adversarios como diferentes y teniendo un cierto poder. La retoma del conflicto, más allá del objeto de las negociaciones, permanece como la amenaza y el motor de la negociación en tanto que proyecto común.”

Lo anterior en el entendimiento de que es una tarea de largo plazo que configure una política de paz de Estado. Igualmente es de la mayor importancia precisar cual sería el escenario que posibilitaría que las partes enfrentadas ganen más abandonando la confrontación que persistiendo en la misma.

Los esquemas de negociar exclusivamente las condiciones para la desmovilización de los alzados en armas y su posterior reinserción en la vida civil, son insuficientes y no permiten avizorar salidas exitosas con las actuales organizaciones armadas. Por supuesto que, debe ser uno de los temas centrales, pero de ninguna manera el único. “Lo que se busca no es un acuerdo en sí, sino unas soluciones que tengan la posibilidad de enfrentar verdaderamente los conflictos y sus raíces.”²⁰

Es por ello que, una negociación política del conflicto armado debe tener una agenda que toque temas como: el problema agrario colombiano, las políticas para el manejo de los recursos energéticos, el problema de la representación política de lo social, la política social del Estado, el problema de los poderes regionales y su relación con el desarrollo regional, el papel de la fuerza pública y de las políticas de seguridad ciudadana en la sociedad del postconflicto.

Debe ser claro que se trata de resolver un conflicto político y no delin cuencial. Se trata de hacer que el conflicto social se continúe expresando por sus ámbitos propios y no recurra únicamente a la confrontación militar como respuesta a la criminalización permanente desde el Estado. Por ello, los actores del conflicto deben tener presencia en las mesa de negociación:

obreros, campesinos, pobladores de las regiones, por que en última instancia es con ellos que deben darse los acuerdos sustanciales.

¿Cuáles son las posibilidades para la solución del conflicto político armado en la región?. No hay que olvidar que la guerra es regional y la negociación es nacional. Los actores del conflicto armado son nacionales y sus expresiones regionales no tienen autonomía para tomar decisiones en los temas de la negociación política del conflicto. En este sentido es necesario contemplar la posibilidad de desarrollar diálogos regionales en el proceso de negociación nacional, pues estos pueden ser útiles en el análisis de las particularidades regionales del conflicto y necesarios para precisar alternativas de solución al mismo.

El problema del desarrollo de las regiones no es una responsabilidad exclusiva del Estado, es también una responsabilidad colectiva de la sociedad civil regional, en sus múltiples expresiones. Si bien las regiones han sido hasta ahora el escenario del conflicto armado, pueden transformarse en el camino para avanzar hacia la construcción social de las regiones, que es sinónimo de paz.

Aún entendiendo las raíces sociales, políticas y económicas del conflicto armado interno, no podemos justificar la guerra desde su existencia. Solucionar el conflicto armado no es otra cosa que darle salida negociada a un periodo muy largo de nuestra historia, no para acabar los conflictos, ni para que acabe el debate ideológico, ni político, sino para que estos puedan desplegar toda su potencialidad, con toda la creatividad que esto conlleva, sin el riesgo de comprometer la vida, la estabilidad económica y los derechos fundamentales de los dirigentes y los ciudadanos. Requerimos por lo tanto, construir un escenario con reglas de juego pactadas por todos, con un Estado garante de las mismas, finalizando la tarea histórica de tener una institucionalidad estatal imparcial y creíble para todos.

Bibliografía

- ALONSO, Manuel Alberto, *Conflicto Armado y Configuración Espacial*, Universidad de Antioquia, Medellín, 1998.
- BAJOIT, Guy, *Les paradigmes de las sicologie*, Louvaine –La Nueve–, Louvaine, 1990.
- Departamento Nacional de Planeación, *La paz, el desafío para el desarrollo*, DNP, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1998.
- FERNÁNDEZ, Carlos Hernan, *Desarrollo y Paz, Seis ensayos para abordar la discusión*, CINEP, Bogotá, 1999.

Grupo de Estudios Regionales Universidad del Rosario

- GARCÍA, Arturo, *Experiencia del Proyecto Gerencia de Paz*, DNP, Bogotá, 1998.
- GONZÁLEZ, José Jairo, *Regionalización y Conflicto: Guaviare y Vichada*, Iepri – Fescol, Bogotá, 2000.
- MARTÍNEZ, Guchuoso José, *Desarrollo rural y violencia en Colombia*, Universidad de Antioquia, Bogotá, 2000.
- “Observatorio de la Violencia”, No. 4, Bogotá, 1996.
- REYES POSADA, Alejandro, *Derechos Humanos y Guerra Civil*, IPEPRI, Bogotá, 2002.
- VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo, *Una mirada académica a los conflictos colombianos*, Ministerio de Justicia y PNR, Bogotá, 1994.
- _____, *El conflicto armado colombiano hoy*, Instituto popular de capacitación, Medellín, 2000.